16621 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 1997, de la Universidad del País Vasco, por la que se corrigen errores de la de 12 de junio de 1997, por la que se hacía pública la composición de las Comisiones calificadoras de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Resolución de 29 de marzo de 1996.

Advertido error en la inserción de la mencionada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 157, de fecha 2 de julio de 1997, se transcriben a continuación la oportuna rectificación:

En la página 20518, columna A, número de orden 143, donde dice: «Don Patricio Urquiza Sarasua, Profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia», debe decir: «Don Patricio Urquiza Sarasua, Profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia».

Leioa, 10 de julio de 1997.—El Rector, Pello Salaburu Etxebarria.

16622 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se hace pública la composición de Comisiones juzgadoras de concursos docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignados los Presidentes y vocales Secretarios por esta Universidad, y celebrado el sorteo establecido en el artículo 6.6 del Real Decreto 1888/1984,

Este Rectorado hace pública las composiciones de las Comisiones que han de resolver los concursos para la provisión de plazas de Profesorado, convocadas por Resolución de esta Universidad de 6 de marzo de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 29), y que son las que se relacionan en el anexo de la presente Resolución.

Estas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación.

Alicante, 11 de julio de 1997.—El Rector en funciones, Manuel Desantes Real.

ANEXO

Convocada por Resolución de 6 de marzo de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 29)

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD (A-841)

Área de conocimiento a la que pertenece: «Filología Inglesa»

Comisión número 619

Comisión titular:

Presidente: Don Enrique Alcaraz Varó, Catedrático de la Universidad de Alicante.

Secretario: Don Félix Rodríguez González, Profesor titular de la Universidad de Alicante.

Vocales: Doña María Teresa Turell Julia, Catedrática de la Universidad «Pompeu Fabra»; doña Fuencisla García Bermejo Giner, Profesora titular de la Universidad de Salamanca, y doña Trinidad Guzmán González, Profesora titular de la Universidad de León.

Comisión suplente:

Presidente: Don Brian Huges Cunningham, Catedrático de la Universidad de Alicante.

Secretario: Don José Mateo Martínez, Profesor titular de la Universidad de Alicante.

Vocales: Don José María Bravo Gozalo, Catedrático de la Universidad de Valladolid; don Jorge Lamarca Margalef, Profesor titular de la Universidad «Rovira i Virgili», y doña M. del Carmen Noya Gallardo, Profesora titular de la Universidad de Cádiz.

Convocada por Resolución de 6 de marzo de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 29)

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA (A-960)

Área de conocimiento a la que pertenece: «Construcciones Arquitectónicas»

Comisión número 622

Comisión titular:

Presidente: Don Miguel Louis Cereceda, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.

Secretario: Don Vicente Martínez Pastor, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.

Vocales: Don Jaime Espuga Bellafont, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña; don Alfredo José Martínez Cuevas, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla, y don Félix Pardo Marín, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Comisión suplente:

Presidente: Don Roberto Vera Soriano, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.

Secretario: Don Juan S. Alcaide Romero, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.

Vocales: Don Francisco Javier Gallego Roca, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada; don Jorge Luis Polo Velasco, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla, y don José Tribo Busquets, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

16623 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 9 de mayo de 1997, de la Universidad de Sevilla, por la que se hace pública la composición de las Comisiones que habrán de resolver los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertida errata en la inserción de la citada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 127, de fecha 28 de mayo de 1997, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En las páginas 16438 y 16439, área de conocimiento «Física Aplicada 37» y área de conocimiento «Física Aplicada 38», en la Comisión titular, donde dice: «Presidente: Don Marcelo Rodríguez Danta, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.», debe decir: «Presidente: Don Marcelo Rodríguez Danta, Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.», y en la Comisión suplente, donde dice: «Presidente: Don Francisco Gascón Latasa, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.», debe decir: «Presidente: Don Francisco Gascón Latasa, Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.».

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

16624 *RESOLUCIÓN de 24 de junio de 1997, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Jesús Yuste Rossell, en representación de la Sociedad «Rossell, Pérez y Cía, S.R.C.», frente a la negativa de don Miguel Seoane de la Parra, Registrador Mercantil número 14 de Madrid, a inscribir determinados acuerdos sociales por cierre del Registro ante la falta de depósito de las cuentas anuales.*

En el recurso gubernativo interpuesto por don Jesús Yuste Rossell, en representación de la Sociedad «Rossell, Pérez y Cía, S.R.C.», frente a la negativa de don Miguel Seoane de la Parra, Registrador Mercantil número 14 de Madrid, a inscribir determinados acuerdos sociales por cierre del Registro ante la falta de depósito de las cuentas anuales.

Hechos

I

Con fecha 12 de diciembre de 1996, la Junta General de socios de «Rossell, Pérez y Cía, S.R.C.», adoptó determinados acuerdos, parte de los cuales fueron elevados a públicos por escritura otorgada el 5 de febrero de 1977 ante el Notario de Madrid don José María Peña y Bernaldo de Quirós.

II

Presentada copia de dicha escritura en el Registro Mercantil de Madrid, fue calificada con la siguiente nota: «El Registrador Mercantil que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18.2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada por haber observado el/los siguiente/s defecto/s que impiden su práctica: La hoja de la sociedad a que se refiere el precedente documento ha sido cerrada por falta del depósito de las cuentas anuales, conforme a lo establecido en el artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil, no siendo el acuerdo social que se pretende inscribir de los exceptuados en dicho precepto. En consecuencia para inscribir los actos que contiene este documento es menester que con carácter previo se practique el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas o se acredite que la sociedad se encuentra en el apartado 5 del supradicho artículo 378. En el plazo de dos meses a contar de esta fecha se puede interponer recurso Gubernativo de acuerdo con los artículos 66 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. Madrid, 17 de febrero de 1997. El Registrador. Sigue la firma».

III

Don Jesús Yuste Rossell, en su calidad de socio gestor de la sociedad y en nombre de la misma, interpuso recurso gubernativo frente a la anterior calificación amparándose en los siguientes motivos: Que la Sociedad no ha procedido a la presentación para su depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales correspondientes a ningún ejercicio por entender que tal obligación solo alcanza, de conformidad con el artículo 41.2 del Código de Comercio, a las sociedades colectivas y comanditarias en las que todos sus socios colectivos sean, al cierre del respectivo ejercicio eco-

nómico, sociedades, siendo así que en este caso todos los socios son y han sido personas físicas; que la interpretación más razonable de la disposición adicional séptima de la Ley 30/1994, en la que puede basarse la calificación, tanto desde un punto de vista literal como finalista, conduce a considerar que la expresión «presentación», referida a las cuentas anuales, no se refiere al hecho del depósito de las mismas sino al formato que han de revestir, a la forma o formas con arreglo a las cuales se han de confeccionar; que, aun en el caso de no prosperar la anterior interpretación, habría que entender que aquella disposición y la instrucción de la Dirección General de los Registros y Notariado que la interpreta únicamente afectan a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que no tengan la condición de empresarios, tanto por razón de su localización, en una Ley que regula el régimen jurídico y fiscal de entidades que no son empresarios, como por la propia redacción del precepto, que remite a lo establecido en la legislación mercantil para los empresarios, al igual que la Instrucción citada cuando habla de «aquellas entidades que sin tener la condición legal de empresarios»; que la reciente Ley 2/1995, posterior a la 30/1994, ha delimitado claramente en qué casos las sociedades personalistas tienen las mismas obligaciones en materia de cuentas anuales que las capitalistas al modificar el artículo 41 del Código de Comercio, que en su redacción anterior remitía en cuanto a formulación, auditoría y publicación de cuentas de las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y en comandita por acciones, a su normativa respectiva, en tanto que ahora el segundo párrafo incorporado al citado artículo 41 prevé el depósito de sus cuentas por las sociedades comanditarias simples y colectivas cuyos socios colectivos fueran todas sociedades españolas o extranjeras; que este nuevo régimen está en línea con las Directivas Comunitarias, en especial las 78/660 y 83/349, sobre cuentas anuales y cuentas anuales consolidadas, modificadas por las 90/604 y 90/605 que prevén el depósito de las cuentas de las sociedades capitalistas y no personalistas, excepto que en el caso de estas últimas todos sus socios sean personas jurídicas; que el nuevo Reglamento del Registro Mercantil, también posterior a la Ley 30/1994, no establece previsión específica alguna sobre la obligación de depósito de las cuentas anuales de las sociedades colectivas y comanditarias simples, de donde ha de deducirse que si la disposición adicional séptima de la Ley 30/1994 hubiera querido extender a estas sociedades aquella obligación, el artículo 365 del nuevo Reglamento del Registro Mercantil lo hubiera recogido expresamente como hace para otros tipos de sociedades; que la interpretación conducente a la no obligación del depósito de las cuentas de las sociedades colectivas se basa en su especial régimen jurídico y en concreto en el régimen de responsabilidad de los socios colectivos que lo hacen de las deudas sociales ilimitadamente y con todo su patrimonio, situación en la que, de ser esos socios así responsables personas físicas, ninguna garantía adicional supone para los terceros la publicación de las cuentas de la sociedad, sino que lo realmente relevante en tal caso es la publicidad de la identidad de esos socios; que aún cuando se concluyera que las sociedades colectivas están obligadas a depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, el no cumplimiento de tal obligación no debe llevar aparejado el cierre del mismo por cuanto esa sanción, impuesta en el artículo 221 de la Ley de Sociedades Anónimas y desarrollada en el artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil, tan sólo puede aplicarse a las sociedades previstas que en él y en el artículo 41 del Código de Comercio, pues al estar el régimen sancionador administrativo sujeto a reserva de ley material conforme al artículo 129 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aunque fuera aplicable a las sociedades colectivas la obligación de depositar sus cuentas prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 30/1994, no lo sería el régimen sancionador de la Ley de Sociedades Anónimas.